



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (2) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA:	SENTENCIA - APELACIÓN
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN
DEMANDADO:	INVERSIONES ATLANTIS S.A.S
RADICADO:	050013105 001 2017 00510 01
ACTA N°:	91

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede pronunciarse en virtud del recurso de apelación de la demandante frente a la sentencia con la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 91** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

La demandante pretende en este proceso básicamente, que se **declare** que la terminación del contrato de trabajo el **29 de diciembre de 2016** es ineficaz porque **INVERSIONES ATLANTIS S.A.S.** utilizó una carta de renuncia fue falsificada y que el contrato de trabajo existente entre las partes se ha mantenido vigente y sin solución de continuidad. Como consecuencia de ello, se ordene el reintegro de manera definitiva manteniendo la afiliación a la seguridad social y el pago de salarios y prestaciones.

Para sustentar sus pretensiones manifestó, en síntesis: i) Fue vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido el 15 de diciembre de 2012, fue diagnosticada con síndrome de túnel del carpo bilateral de origen común. Por no encontrarse en plenitud de condiciones y debido a las múltiples incapacidades médicas, la accionada ha desplegado conductas propias de acoso laboral que ha soportado pacientemente para mantener la afiliación al sistema de salud. ii) La accionada solicitó ante el Ministerio de Trabajo autorización para su despido que fue negada y en virtud de tal negativa la demandante fue instada por el abogado Diego Uribe Villa a que firmara su carta de renuncia a lo que

¹ Páginas 2 a 9 del expediente digital, contenido en carpeta C01. Demanda del 21 de junio de 2017. Pág. 1

se negó rotundamente porque implicaría quedar desprotegida económicamente y en materia de salud. iii) El 2 de enero de 2017 se presentó a laborar siendo informada de manera sorpresiva que no tenía que hacerlo porque había renunciado desde el 29 de diciembre de 2016 y solicitó que le entregaran la carta supuestamente firmada por ella, de la que resalta varios aspectos en el hecho NOVENO que le llevan a afirmar que fue falsificada por lo que formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el día 11 de enero de 2017. iv) Mediante fallo de tutela del 16 de marzo de 2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín ordenó el reintegro de manera transitoria, al que se dio cumplimiento por INVERSIONES ATLANTIS S.A.S. por lo que se hace necesario acudir a esta instancia para obtener un pronunciamiento definitivo.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA²

INVERSIONES ATLANTIS S.A.S. contestó oportunamente, se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que carecen de fundamento fáctico y jurídico porque la terminación del contrato de trabajo fue por “causa de la carta de terminación presentada por la señora Maria Eugenia Ospina Guzmán y a la fecha no existe prueba técnica que demuestre que la misma fue falsificada o adulterada en su contenido”. Señala que su actuar fue honesto y leal, realizó los procedimientos para la desvinculación de la actora conforme la carta de renuncia. El argumento en el que se sustenta la pretensión es que la carta fue falsificada, con base en ello la accionante formuló denuncia penal que está cursando en la Fiscalía 10 Seccional de Medellín con el fin de probar tal aseveración, y hasta tanto no sea resuelta no hay fundamento fáctico y jurídico que sustente la pretensión. Aduce que desde el 29 de marzo de 2017 dio cumplimiento a las cargas obligacionales mediante el fallo constitucional.

Al contestar el hecho NOVENO negó que la carta de renuncia hubiese sido falsificada e informó que mediante oficio 001493 del 14 de marzo de 2017 se requirió por la Fiscalía 20 Seccional de Medellín el original del escrito de la renuncia y que para la fecha de la contestación ya había sido aportado.

Propuso como excepciones: BUENA FE DE INVERSIONES ATLANTIS, MALA FE DE LA DEMANDANTE, DENUNCIA PENAL EN CURSO, INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO, PAGO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES, COBRO DE LO NO DEBIDO y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DEL TRABAJADOR.

² **Páginas 129 a 135** del expediente digital, contenido en carpeta C01. Con auto del **14 de marzo de 2018** (páginas 159 y 160) se requirió a la demandada para que se pronunciara sobre los **hechos 6, 7 y 10, así como las pretensiones**, lo que fue atendido con memorial del **16 de abril de 2018** (páginas 162 a 164).

2. LA SENTENCIA³

En audiencia del **25 de febrero de 2020** la Juez adoptó las siguientes decisiones: Declaró próspera la excepción de TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DEL TRABAJADOR propuesta por el apoderado de INVERSIONES ATLANTIS S. A. S. al dar respuesta a la demanda y así absolvió a la sociedad de las pretensiones formuladas por la señora MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN a quien condena en costas por haber resultado vencida en el juicio.

Para adoptar estas decisiones circunscribe el problema jurídico a determinar si el vínculo laboral terminó por decisión unilateral de la trabajadora o si tuvo como móvil su estado de salud. Y partió del presupuesto básico de la pretensión principal que se encamina a que se declare que es ineficaz la terminación del contrato porque la accionada utilizó una carta de renuncia falsificada. Fue así como, tras la valoración del acervo probatorio a la luz de los artículos 60 y 61 del CPL y del 176 del CGP concluyó que la actora no cumplió con la carga probatoria al encontrarse acreditado *“que la firma puesta en el documento al igual que la impresión dactiloscópica corresponde a la de la demandante”* acogiendo la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación. De este modo, frente al problema jurídico planteado encontró probado que el vínculo laboral finalizó por decisión unilateral de la trabajadora. No obstante, efectuó el análisis referido a la estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, para enfatizar en la ausencia de prueba de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15% y que el contrato no terminó por decisión unilateral de la empleadora sino de la misma trabajadora, encontrando así que *“no se acreditan los presupuestos que fueron definidos por la CSJ para declarar que la señora MARIA EUGENIA OSPINA cuente con estabilidad laboral reforzada, por lo que la orden dada por el Juez Segundo Civil del Circuito de esta ciudad no será ratificada”*

3. RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

Para solicitar la revocatoria de la sentencia, el análisis se efectúa abordando los siguientes aspectos: **i)** En primer lugar, se centra el análisis en el dictamen grafológico y dactiloscópico realizado por la Policía Judicial, sobre el que destaca lo siguiente: **a)** Que este dictamen no pudo ser controvertido en la instancia penal porque la decisión de archivo nunca fue puesta en conocimiento de la accionante destacando que de acuerdo con el documento de folio 163 en el espacio de firmas aparece su nombre sin la firma. **b)** Que es en el traslado que se hace en la audiencia de pruebas donde se enteraron de tal decisión, más allá de que reposara desde más de 8 meses en el expediente. **c)** Que los informes técnicos o dictámenes periciales no atan la decisión del Juez por las conclusiones a las que en ellos se llegue, resaltando que como soporte para el dictamen no figura el documento original en el que aparezca la huella, pues con la demanda solo aportó la reproducción mecánica de la supuesta renuncia. Así, se pregunta: ¿qué huella sirvió de sustento para

³ Páginas 208 a 210 del expediente digital, contenido en carpeta C01; Audio contenido en la carpeta CD_2.

que la Policía Judicial a través de la denuncia penal llegara a la conclusión que llega? **d)** Solicita entonces que se requiera a la demandada si ya tiene nuevamente el documento de renuncia y si no es así a la Fiscalía, para que lo aporten al proceso y que **un auxiliar de la justicia nombrado por la judicatura verifique nuevamente la autenticidad de la renuncia.**

ii) Señala que debe tenerse en cuenta su situación de salud como prueba indiciaria que puede sustentar la razón por la cual la accionante no renunció, y que las máximas de la experiencia enseñan que una persona en estado de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta por situaciones de salud no renuncia, insistiendo en que la testigo Sara manifiesta “que su madre nunca manifestó un interés de renunciar, por el contrario el 2 de enero se presentó nuevamente a laborar creyendo pues que efectivamente el contrato continuaba, cuando se lleva la sorpresa de la supuesta renuncia”. **iii)** Aduce que la carga probatoria era de la parte demandante, pero en el expediente hay una simple reproducción mecánica, y así concluye que se trata de “un proceso donde se toma la decisión y se convalida de que no hay prueba”; y agrega que la demandada reconoce que el original lo tienen en su poder, documento que desde la demanda se solicitó fuera aportado, lo que no ha ocurrido.

4. TRAMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Con auto del **7 de abril de 2021**⁴ se corrió traslado a las partes para que formularan alegatos de conclusión previo a dictar sentencia en esta instancia y las partes intervinieron así:

El apoderado de la **DEMANDANTE** reitera los argumentos del recurso de apelación, dirigidos principalmente a que se oficie a **INVERSIONES ATLANTIS S.A.S.** o a la Fiscalía 20 Seccional de Medellín con el fin de que se aporte al expediente el documento original contentivo de la carta de renuncia insistiendo en lo siguiente: **i)** Que desde el escrito de la demanda y en la audiencia de trámite en primera instancia se solicitó por el apoderado de manera infructuosa que se oficiara a fin de que el original de la carta de renuncia haga parte del expediente físico, para que se pueda tomar una decisión acorde con el análisis de prueba que exige el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo, señalando que resulta indispensable para constatar la veracidad de la firma y la huella que se dice contiene el referido documento; aun cuando exista al interior del expediente el estudio técnico por parte de policía judicial de la Fiscalía General de la Nación que en manera alguna suplanta la prueba necesaria para resolver el litigio. **ii)** Reitera que la simple fotocopia que reposa en el expediente, no puede servir de base para que se tome una decisión y así “no incurrir en el error en que incurrió el juez en primera instancia de tomar la decisión con fundamento en la simple fotocopia visible a folio 53”. **iii)** Cuestiona el que la fiscalía llegue a la conclusión de que la huella es de la demandante, si de acuerdo con la fotocopia que reposa en el expediente solo se refleja la parte exterior y no la huella completa; por lo que en su criterio, se trata de un interrogante que solo se despeja valorando el documento original. **iv)** Y aduce que no

⁴ PDF 01 de la carpeta de segunda instancia.

existe claridad sobre si la firma de la carta de renuncia cuya falsedad se alega está a puño y letra de la demandante, para agregar:

“(…) mas allá de que el estudio de policía judicial concluya que sí es la firma de la demandante, conclusión que cobraría valor, si se observa que por lo menos, como lo exige la técnica, el estudio técnico se basó en una firma en tinta plasmada directamente en el papel, frente a lo cual no se tiene certeza, pero se puede tener si el documento original es arrimado al expediente”.

El apoderado de **INVERSIONES ATLANTIS S.A.S** solicita confirmar en su integridad la sentencia que se ajusta a las normas legales y línea jurisprudencial existentes y que se condene en costas y agencias en derecho, en esta instancia, a la parte demandante; señalando que se ratifica en los argumentos de defensa toda vez que, mediante prueba documental quedó probada su exoneración⁵

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación, siendo claro que en este proceso **la pretensión de ineficacia de la terminación del contrato de trabajo se sustenta en la afirmación de que la carta de renuncia es falsa**. Así, se analizará si resulta procedente acceder a la solicitud del recurrente, dirigida a incorporar en el expediente el original de la carta y decretar nuevo dictamen pericial en relación con la firma y huella. Y si se acreditan los presupuestos para afirmar que en este caso se acredita una terminación del contrato que va en contravía de los mandatos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

5. CASO CONCRETO.

La demandante pretende en este proceso que se declare que la terminación del contrato de trabajo el **29 de diciembre de 2016** es ineficaz porque **INVERSIONES ATLANTIS S.A.S.** utilizó una carta de renuncia que fue falsificada y que el contrato de trabajo existente entre las partes se ha mantenido vigente y sin solución de continuidad; siendo claro que acude al proceso con el fin de obtener un pronunciamiento definitivo en relación con la protección transitoria otorgada mediante sentencia de tutela del 16 de marzo de 2017 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín en la que se ordenó el reintegro a INVERSIONES ATLANTIS S.A.S. derivado de un fuero de estabilidad laboral reforzada consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Así, la tesis de la demanda se sustenta en que la carta de renuncia del 29 de diciembre de 2016 es falsa, por lo que la actora formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 11 de enero de 2017 en contra de Diego Uribe Villa en calidad de abogado de INVERSIONES ATLANTIS S.A.S. y de Andrés Felipe Parra Hoyos en calidad de representante legal suplente de la sociedad.

⁵ PDF 02 de la carpeta de segunda instancia.

Y se advierte por la Sala que si bien ambas partes aportaron **copia de la carta**⁶ en todo caso solicitaron pruebas relacionadas con ella: En la demanda, que se oficiara a INVERSIONES ATLANTIS S.A.S para que con destino al proceso aportara el documento original; y en la contestación que se oficiara a la FISCALÍA 20 SECCIONAL DE MEDELLÍN con el fin de que certificara el estado actual de la denuncia penal SPOA No. 050016000206201701188, habiendo indicado que **el original de la carta fue aportado a la investigación penal** en virtud del requerimiento efectuado Fiscalía 20 Seccional de Medellín mediante oficio 001493 del 14 de marzo de 2017

Es así como en la audiencia celebrada el **27 de febrero de 2019**⁷ se decretó la prueba solicitada por INVERSIONES ATLANTIS S.A.S ordenando oficiar a la Fiscalía 20 Seccional de Medellín para que se informara sobre el trámite de la denuncia adelantada por la demandante⁸. Se libró **oficio 311** del 27 de febrero de 2019 radicado en Fiscalía el 11 de marzo de 2019⁹ y ante solicitud del apoderado de la pasiva se requirió nuevamente a la entidad mediante **oficio 658** radicado el 21 de mayo¹⁰. Finalmente se dio respuesta al requerimiento, la que fue radicada en la Oficina de Apoyo Judicial desde el **5 de junio de 2019**¹¹.

Ya en la audiencia del **25 de febrero de 2020**¹² se puso en conocimiento de los apoderados la respuesta de la Fiscal 20 Seccional Medellín a la que se adjuntan dos dictámenes uno de **perito en dactiloscopia y otro de grafología**, que fueron ordenados dentro de la investigación realizada con el fin de que analizaran el documento tachado de falso:

- INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –FPJ-13- del **2 de octubre de 2017** rendido por el Técnico Investigador II ALVARO AUGUSTO MARULANDA OTALVARO del grupo de Documentología y Grafología Forense del CTI dirigido a la FISCAL 20 SECCIONAL¹³, en virtud de oficio del **27 de junio de 2017** en el que se solicitó lo siguiente:

Se transcribe del oficio petitorio lo pertinente a realizar que a la letra se lee: "REALIZAR COTEJO GRAFOLÓGICO DE LA FIRMA OBRANTE EN EL DOCUMENTO "**RENUNCIA IRREVOCABLE**" DE MARIA E. OSPINA QUE SE ADJUNTA EN SOBRE SELLADO, ROTULADO Y EN CADENA DE CUSTODIA, A FIN DE DETERMINAR SI LA MENCIONADA FIRMA Y... FUERON PLASMADOS POR LA SEÑORA MARÍA EUGENIA OSPINA GUZMAN, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA 43.721.782".

⁶ Con la demanda - **Página 61** y con la contestación **página 138**

⁷ Páginas 167 y 168 del expediente digital, contenido en carpeta C01. Audio contenido en la carpeta CD_1 - a partir del minuto 18:17

⁸ Se libró **oficio 311 del 27 de febrero de 2019** – Página 179-

⁹ Página 181

¹⁰ Páginas 182 a 187

¹¹ Páginas 188 a 206

¹² Páginas 208 a 210 del expediente digital, contenido en carpeta C01; Audio contenido en la carpeta CD_2.

¹³ Páginas 194 a 201 del expediente digital.

En el **numeral 3** sobre la DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS se informa que se recibieron “dos sobres de manila, sellados con cinta, embalados, rotulados y con su respectivo registro de cadena de custodia diligenciado” y en el **numeral 3.1** se expresa en relación con el MATERIAL DUBITADO lo siguiente:

Se recibe el material de estudio en un sobre de manila, debidamente sellado, embalado, rotulado, y con su respectivo registro de cadena de custodia diligenciado, dentro del cual se recibe el siguiente material:

Una (1) firma legible como de la señora María E. Ospina y C.C. 43.721.782, obrante en la cara anversa de una hoja con un Asunto: Renuncia Irrevocable, fechada: 29/12/2016, parte media, lado izquierdo, firma en original, elaborada con lapicero de tinta con tonalidad negra, el documento se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de presentar dos huecos de máquina perforadora, los cuales son afectan para nada la zona a estudiar.

La firma de este documento se contrastó con la del MATERIAL INDUBITADO descrito en el **numeral 3.2.** que se refiere siete (7) folios con muestras manuscriturales aportadas por la señora MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN que fueron recepcionadas el 12 de julio de 2017.

En el informe se presenta la descripción de los procedimientos técnicos e instrumentos empleados así como su estado al momento del examen, aparecen de manera detallada las identidades graficas más sobresalientes del contraste entre las firmas tales como los espacios, la forma, la inclinación de los ejes literales, las líneas cóncavas de la letra M con que inicia la firma, el patrón de las letras R, I, E, O, P y A, los puntos y demás líneas cóncavas sobre las letras de la firma “MARIA E. OSPINA”; analizándose además los números de la cédula ubicados debajo de la firma en los que hay coincidencia en el 4, 3, 2.

Al final, en el numeral 9 referido a la INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS se indica:

“De los estudios y argumentos técnicos anteriormente expuestos, se concluye que, hay Uniprocedencia Manuscritural, entre la firma legible como de la señora María E. Ospina y C.C. 43.721.782, obrante en la cara anversa de una hoja con Asunto: Renuncia Irrevocable, fechada 29/12/2016, parte media, lado izquierdo, **firma en original, elaborada con lapicero de tinta con tonalidad negra**, con las muestras aportadas como patrón por la mencionada señora María Eugenia Ospina Guzmán C.C. 43.721.782 de Enviado Ant.” (**negrilla intencional de la Sala**)

- INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO del **16 de noviembre de 2017** rendido por la Técnico Investigador II ALVARO PATRICIA BEDOYA ZAPATA del grupo de lofoscopia del CTI dirigido a la FISCAL 20 SECCIONAL¹⁴, en virtud de oficio del **27 de junio de 2017** en el que se solicitó lo siguiente:

¹⁴ Páginas 201 a 204 del expediente digital.

Lo solicitado en el oficio petitorio "...Realizar cotejo Lofoscópico de la huella obrante en el documento "RENUNCIA IRREVOCABLE" de **MARIA E. OSPINA** que se adjunta en sobre sellado, rotulado y en cadena de custodia, a fin de determinar si la mencionada firma y huella fueron plasmados por las Señora **MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN** identificada con la cédula número **43.721.782.**"

En el **numeral 3** sobre la DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS se informa que se recibió "un (01) contenedor de Manila, Rotulado, con su respectivo formato de cadena de custodia" conteniendo en su interior un documento con impresión dactilar que se describe en el **numeral 3.1.** así:

CONTENEDOR No. 1

3.1 Dos (02) folios que comprende: Original y Copia del documento "RENUNCIA IRREVOCABLE, con impresión dactilar al final del documento y que avala la firma de **MARIA E. OSPINA** con c.c. **43.721.782.**

En el informe se indican como instrumentos utilizados lupa de clasificación dactiloscópica, el sistema AFIS de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y la Base de Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (PMTII). En el numeral 8 referido a la descripción clara y precisa de los procedimientos utilizados se explica que analizada con lupa de 4.5 dioptrías de aumento y en Sistema AFIS FGN, la impresión dactilar del documento corresponde a un solo dactilograma, señalando en el numeral 8.1.1. lo siguiente:

8.1.1 La impresión dactilar obrante al anverso del Original del documento "RENUNCIA IRREVOCABLE (documento relacionado en el numeral 3.1), **ES APTA** para cotejo e ingreso al Sistema AFIS F.G.N. y CCT de la RNEC.

Así, al encontrarla apta para el cotejo se solicita a la Registraduría Municipal del Estado Civil informe de consulta web de la tarjeta decadactilar de la señora **MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN** que se anexa, en el que aparecen las huellas correspondientes a varios dedos, entre ellas la del índice derecho¹⁵. Y efectuado del cotejo dactiloscópico entre la huella del **documento original** descrito en el numeral 3.1. con las de la tarjeta decadactilar, se concluye lo siguiente:

8.3.1 Cotejada la impresión dactilar obrante en el documento Original "RENUNCIA IRREVOCABLE, (documento relacionado en el numeral 3.1), con la impresión dactilar del **Dedo Dos (INDICE DERECHO)** existente en el informe de consulta WEB de la tarjeta decadactilar de preparación de la cédula número **43.721.782**, expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil a nombre de **MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN**, se establece que éstas **SE IDENTIFICAN ENTRE SI**, en su morfología y ubicación de puntos característico.

¹⁵ Página 205 del expediente digital.

Es así como en el momento de la INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS se indica que la impresión dactilar del **documento original** RENUNCIA IRREVOCABLE relacionado en el numeral 3.1. SE IDENTIFICA con la impresión dactilar del dedo dos (INDICE DERECHO) existente en el informe de consulta WEB de la tarjeta decadaactilar de preparación de la cédula de ciudadanía 43.721.782 a nombre de la señora MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN.

- También se adjunta a la respuesta de la Fiscalía, CONSTANCIA PRESENCIAL del **2 de noviembre de 2017** con la que se acredita que la señora MARIA EUGENIA OSPINA fue enterada del resultado del estudio grafológico realizado al documento tachado por ella de falso¹⁶, que está suscrita por ella y por el asistente de Fiscal II JUAN PORFIRIO PALACIO RESTREPO:

En la fecha, siendo las 11:00 a.m. compareció al despacho la señora MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN, identificada con la cédula 43.721.782 de Envigado, quien fue enterada del resultado arrojado al estudio grafológico realizado al documento tachado por ella de falso, el cual se trata de una carta denominada "Renuncia Irrevocable" fechada el 29 de diciembre de 2016

- Y se anexa la decisión adoptada el **8 de mayo de 2019** por la Fiscal 20 Seccional, SANDRA VIVIANA ALVAREZ TABARES de ordenar el archivo de las diligencias dentro del trámite con radicado 050016000206201701188. Para tomar esta determinación, luego de transcribir apartes de la denuncia efectuada por la accionante quién afirmó: "Los señores Diego y Andrés me falsificaron la firma en una carta de renuncia", se razona de este modo¹⁷: **i)** En primer lugar, se señala que de conformidad con los resultados de las pruebas de dactiloscopia y grafología se estableció que la firma y la huella dactilar que reposa en el **documento original** RENUNCIA IRREVOCABLE corresponden a la señora MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN. **ii)** De otro lado, se enfatiza en que habiéndose comunicado el resultado del estudio grafológico desde el 2 de noviembre de 2017, la denunciante hubiere presentado oposición o controversia. **iii)** Y se hace especial énfasis a la originalidad del documento así:

"En cuanto a los documentos, no cabe duda acerca de la originalidad de los mismos, pues los investigadores peritos consignan en la descripción que efectúan de la firma y de la huella dactilar de que se tratan de elementos originales en tinta. Es decir, queda descartado que se trate de fotocopias o de elementos escaneados"

Negrilla de la Sala

Se destaca por esta corporación que habiéndose puesto en conocimiento de las partes esta prueba que contiene los dictámenes de dactiloscopia y grafología del documento tachado de falso por la demandante, y siendo la parte activa aquella contra quien se aducen, estuvo conforme con ellos. De hecho se abstuvo de solicitar la comparecencia de los peritos a la audiencia en los términos del artículo **228 del Código General del**

¹⁶ Página 205 del expediente digital.

¹⁷ Páginas 190 a 193 del expediente digital.

Proceso¹⁸ aplicable en el procedimiento laboral en virtud de lo dispuesto en el **artículo 145 del Código Procesal del Trabajo**. En efecto, en la audiencia del **25 de febrero de 2020** en el término del traslado la intervención del apoderado se circunscribió a lo siguiente¹⁹:

“Señora juez, no tengo nada que decir frente a los informes y la copia del expediente que envió la fiscalía, pues más allá de hacer salvedad en lo siguiente y es que el documento original soporte de la fiscalía no hace parte de acá del expediente del despacho, ese sería como el único punto, que no hace parte de este expediente para digamos controvertir, o por parte de la parte demandante haber revisado pues efectivamente el tema de la calidad de la firma y de las huellas que hace relación el informe de policía judicial de Fiscalía.”

Ahora bien, es claro que la decisión absolutoria de la Juez se sustenta básicamente en el incumplimiento de la carga probatoria de la parte actora a la luz de lo previsto en el artículo 176 del CGP, providencia en la que destaca que “fue la misma promotora de este proceso, la señora MARIA EUGENIA OSPINA GUZMAN quien denunció a los representantes legales de la accionada por falsedad en el documento en el que se plasma la renuncia al contrato de trabajo, en cuyo trámite se logró concluir que la firma puesta en el documento al igual que la impresión dactiloscópica corresponde a la de la demandante (...)”. Así, concluyó que la activa no logró desvirtuar que la firma puesta en el documento de renuncia no es la suya, por lo que la terminación del contrato de trabajo se presentó en virtud de la decisión unilateral de la señora OSPINA GUZMÁN. Y a partir de este razonamiento y al no encontrar la prueba de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15% y que el contrato no terminó por decisión unilateral de la empleadora, encontró que “no se acreditan los presupuestos que fueron definidos por la CSJ para declarar que la señora MARIA EUGENIA OSPINA cuente con estabilidad laboral reforzada, por lo que la orden dada por el Juez Segundo Civil del Circuito de esta ciudad no será ratificada”.

Pues bien, el recurrente centra su inconformidad en relación con la decisión adoptada, planteando básicamente: **i)** Que no tuvo la oportunidad de controvertir el dictamen grafológico y dactiloscópico realizado por la Policía Judicial en la instancia penal ni en el traslado que se hizo en el marco de este proceso laboral; **ii)** Que en el expediente solo reposa reproducción mecánica del documento, solicitando se requiera a la demandada o a la Fiscalía para que lo aporten al proceso y que en esta instancia se decrete prueba para que **“un auxiliar de la justicia nombrado por la judicatura verifique nuevamente la**

¹⁸ **ARTÍCULO 228. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN.** La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial **podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones.** Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. **En virtud de la anterior solicitud**, o si el juez lo considera necesario, **citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen.** La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor [...] (negritas y resalto intencional)

¹⁹ A partir del minuto 02:47 del audio contenido en la carpeta CD_2.

autenticidad de la renuncia"; señalando que desde la demanda solicitó fuera aportado y ello no ha ocurrido, lo que en su criterio resulta indispensable para constatar la veracidad de la firma y la huella dado que la fotocopia que reposa en el expediente no puede servir de base para tomar la decisión. **iii)** Ya en las alegaciones en esta instancia cuestiona el que la fiscalía llegue a la conclusión de que la huella es de la demandante, porque de acuerdo con la fotocopia que reposa en el expediente solo se refleja la parte exterior y no la huella completa; que no existe claridad sobre si la firma de la carta de renuncia cuya falsedad se alega está a puño y letra de la demandante, para agregar:

"(...) mas allá de que el estudio de policía judicial concluya que sí es la firma de la demandante, conclusión que cobraría valor, si se observa que por lo menos, como lo exige la técnica, el estudio técnico se basó en una firma en tinta plasmada directamente en el papel, frente a lo cual no se tiene certeza, pero se puede tener si el documento original es arrimado al expediente".

La Sala no encuentra procedente el decreto de la prueba solicitada por el recurrente, por las siguientes razones: **i)** De acuerdo con lo previsto en el **artículo 83** del Código de Procedimiento Laboral las partes no pueden solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia. Y cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta. Y es claro que el Juez puede ordenar la práctica de todas aquellas pruebas que sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos en los términos del **artículo 54** del mismo estatuto. **ii)** Pero en este trámite, si bien en la demanda se solicitó como prueba que se oficiara a INVERSIONES ATTLANTIS S.A.S para que con destino al proceso aportara el documento original; ésta no fue decretada sin que el apoderado de la activa interpusiera recurso alguno. Ahora, en la contestación se indicó que el original de la carta había sido aportado a la investigación penal en virtud del requerimiento efectuado por la Fiscalía 20 Seccional de Medellín mediante oficio 001493 del 14 de marzo de 2017, y la activa tampoco reformuló la prueba dentro de la oportunidad procesal pertinente para solicitar que se oficiara al ente investigador que aportara el original, si era éste su interés²⁰. **iii)** Lo cierto es que finalmente se decretó como prueba que se oficiara a la Fiscalía 20 Seccional de Medellín para que informara sobre el trámite de la denuncia adelantada por la señora OSPINA GUZMÁN y en virtud de los oficios 311 y 658 se allegó la información al plenario desde el **5 de junio de 2019** poniéndose en traslado de las partes en la audiencia del **25 de febrero de 2020**, garantizando el debido proceso de la parte actora quién en la oportunidad procesal se mostró conforme con el contenido, manifestando expresamente

²⁰ Según el inciso segundo del **artículo 28 del Código Procesal del Trabajo**, modificado por el artículo 15 de la Ley 712 de 2001 "La demanda podrá ser reformada por una sola vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvenición, si fuere el caso"

no tener nada que decir; limitándose a señalar que el documento original de la carta no reposa en el plenario. **iv)** Así, no se acreditan los presupuestos para acceder a la prueba solicitada; ni tampoco encuentra esta corporación que sea indispensable para resolver este proceso el solicitar a la Fiscalía 20 Seccional de Medellín que remita el original del documento para realizar otro experticio.

Es cierto que las partes solo adosaron con la demanda y contestación **copia** de la carta de renuncia del 29 de diciembre de 2016²¹ en la que reposa un sello rectangular de INVERSIONES ATLANTIS S.A.S de la misma fecha ubicado en la parte superior derecha del documento, con el nombre "MARIA E. OSPINA" y el número "43.721.782" suscritos a mano en la parte inferior. Pero no resulta indispensable contar con el documento original porque éste ya fue analizado por el Técnico Investigador II ALVARO AUGUSTO MARULANDA OTALVARO del grupo de Documentología y Grafología Forense del CTI y por la Técnico Investigador II PATRICIA BEDOYA ZAPATA del grupo de Iofoscopia del CTI. **Ambos funcionarios expresaron de manera clara en su experticia que el dictamen realizado por cada uno versó sobre el original de esa carta.** El perito grafólogo señala en su informe que el documento dubitado tenía la **firma en original elaborada con lapicero de tinta tonalidad negra.** Y la perito que realizó el cotejo Iofoscópico fue enfática al señalar que recibió dos folios uno de ellos original con una impresión dactilar apta para el cotejo, concluyendo que la huella de **ese documento original** corresponde a la del índice derecho de la demandante.

En criterio de esta corporación tampoco es necesario decretar la realización de nuevos dictámenes, porque los aportados al proceso son serios, completos, provienen de peritos expertos en dactiloscopia y grafología, fueron decretados en el marco de una investigación penal a instancias de la demandante; en ellos se presenta la descripción de los procedimientos técnicos e instrumentos empleados y ofrecen conclusiones contundentes sobre la autoría de la carta de renuncia: i) El perito grafólogo expresa que hay Uniprocedencia Manuscritural entre la firma y los números obrantes en la cara anversa del documento original con los realizadas por la señora María Eugenia Ospina Guzmán en las muestras aportadas para el cotejo. ii) La perito en dactiloscopia señala que la impresión dactilar que aparece en el documento original se identifica con la del dedo índice derecho de la demandante.

Y esta determinación de la Sala se sustenta además, en el hecho de que se trata de unos dictámenes que se pusieron en conocimiento de la accionante en el marco de la investigación penal desde el 2 de noviembre de 2017 sin que hubiese presentado manifestación ni reproche alguno, circunstancia que llevó a que se ordenase el archivo de las diligencias dentro del trámite con radicado 050016000206201701188 desde el 8 de mayo

²¹ Página 61, reiterada en página 138 del expediente digital.

de 2019; dictámenes que también fueron puestos en traslado en el marco de este proceso laboral en la audiencia del 25 de febrero de 2020 oportunidad en la que, como ha quedado visto, la activa estuvo conforme con el contenido, manifestando expresamente no tener nada que decir.

Efectuada así la valoración del acervo probatorio en su conjunto, a la luz de lo previsto en el artículo 60 del Código Procesal del trabajo, la Sala comparte la conclusión a la que se llega en primera instancia referida a que fue la señora MARIA EUGENIA OSPINA GUZMÁN quien terminó unilateralmente el contrato de trabajo con la manifestación efectuada por escrito el **29 de diciembre de 2016** cuando expresó:

“Por medio de la presente presento mi carta de renuncia irrevocable, ya que la empresa a (sic) incumplido darme las vacaciones solicitadas desde el 13 de diciembre de 2016, de las cuales tengo derecho”

Y en relación con los argumentos que se esbozan para finiquitar el vínculo no se alega en el proceso ni comprueba, una justa causa consagrada en el artículo 62 del C.S.T. del trabajo literal b) en concordancia con el artículo 187 del CST referido a la época de las vacaciones.

Tampoco se comprueba en este proceso la existencia de un vicio en el consentimiento al momento de suscribir la renuncia. En la demanda se afirma que la actora “fue instada por parte del abogado Diego Uribe Villa a que firmara su carta de renuncia” y que al no ceder a la presión se presentó el 2 de enero de 2017 para que le informaran en cuál de los establecimientos de comercio debía presentarse a trabajar. Debe indicarse que los vicios del consentimiento se refieren a la falta de voluntad en una actuación, que deriva en la nulidad del acto al encontrarse viciado, pues los actos solo tienen eficacia y por ende producen efectos jurídicos cuando cumplen con los requisitos de capacidad²², **consentimiento**, objeto y causa lícita. En este sentido, los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo, y han sido explicados por la Jurisprudencia así:

El artículo 1508 del Código Civil establece que los vicios de que puede adolecer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. En la Sentencia C-993 de 2006 se explicó que *“la fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la misma. El dolo es toda especie de artificio para engañar a otro sujeto del negocio jurídico y que induce o provoca un error en él. El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la representación mental del sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de la ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento.”*²³

²² SL 3144 de 2021, acápite 1.2 Sobre la discapacidad mental que afecta la voluntad reflexiva. *“Ahora, pese a la orientación fáctica del cargo, la Sala considera oportuno señalar que conforme a la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta Corporación, no cualquier alteración psicológica afecta la facultad negocial de la persona, sino que esta debe tener la entidad suficiente para alterar su capacidad de juicio y además estar debidamente probada con los medios idóneos. [...]”*

²³ T 438 de 2020, Corte Constitucional.

Vicios que pueden permear diferentes actos jurídicos como la transacción o conciliación de las obligaciones laborales, y el acto de renuncia, pero **que deben probarse en el proceso judicial**²⁴ puesto que **no se presumen** como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 572 de 2018:

Cabe precisar en estos aspectos, que el consentimiento que se exige en materia laboral para la validez de los diferentes actos jurídicos debe ser libre y espontáneo y no debe adolecer de ningún vicio. Sobre el punto, el artículo 1502 del Código Civil, aplicable a las relaciones laborales en virtud del artículo 19 del C.S.T., consagra que para que una persona se obligue se requiere, entre otros elementos, que su consentimiento esté libre de vicios, esto es, que no adolezca de error, fuerza o dolo (artículo 1508 del C.C.). Este postulado, a juicio de la Corte, adquiere una enorme importancia en las relaciones obrero - patronales, por cuanto se hace indispensable que el trabajador, que es la parte débil de la relación, pueda brindar su consentimiento de manera consciente, libre, espontánea y alejada de cualquier tipo de constreñimiento, presión, engaño, error o violencia, a fin de que se pueda predicar la validez del acto jurídico que suscribe.
[...]

Frente a los vicios del consentimiento, esta Corporación en su jurisprudencia ha sostenido **que no se pueden presumir por el juez laboral sino que deben estar suficientemente acreditados dentro del juicio, en el entendido de que** "...con arreglo a los arts. 1508 a 1516 del C.C, el error, la fuerza y el dolo como vicios del consentimiento capaces de afectar las declaraciones de voluntad, no se presumen, deben acreditarse plenamente en el proceso" (sentencias SL16539-2014, SL10790-2014 y SL13202-2015).

(Negrita intencional)

Puntualmente, sobre el acto de renuncia y la prueba de los vicios del consentimiento, ha señalado la Alta Corporación:

Ahora, si bien la conciliación fue consecuencia de conductas abusivas del empleador, no puede decirse lo mismo de **la renuncia** que milita a folio 285. En primer lugar, porque **allí no se expresaron los móviles o causas de la extinción del contrato**, es decir, se presentó pura y simple. En segundo lugar, **no es nítido que el acto de dimisión hubiese sido producto de un constreñimiento o coacción del empleador, y no de una decisión autónoma y libre del trabajador**. De hecho, en la misma carta el demandante agradeció al club «su valiosa colaboración y ayuda durante el tiempo que laboré para la institución».

Luego, a diferencia del arreglo conciliatorio, que estuvo orientado a despojar al demandante de sus derechos y reclamos laborales bajo la apariencia de un libre acuerdo, **frente al acto de renuncia no existen motivos poderosos o elementos probatorios convincentes que conduzcan a idéntica conclusión.**²⁵

(Negrita intencional)

Por otro lado, si bien el apoderado en su recurso insiste en que se tenga como prueba indiciaria las manifestaciones de la actora en el trámite ante el Ministerio de Trabajo y las declaraciones de la testigo sobre que la actora no tenía la intención de renunciar, lo cierto es que **los vicios del consentimiento no se presumen**, deben acreditarse de manera suficiente en el proceso, por lo que la Sala no puede arribar a una conclusión distinta a la de la juez de primera instancia a pesar de las circunstancias que relata el abogado recurrente.

²⁴ SL 410 de 2020 y SL 3144 de 2021, Corte Suprema de Justicia.

²⁵ SL 1451 de 2018.

Finalmente, sobre la situación de salud de la señora OSPINA GUZMAN, el apelante invoca la aplicación del precedente constitucional referido a que la protección frente a la terminación del contrato en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no solo procede en los casos en que la persona acredita una PCL superior al 15%.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido en diversas oportunidades que la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende para quienes se encuentren en alguna de las siguientes categorías: **i)** en situación de invalidez; **ii)** en condición de discapacidad, calificados como tal conforme con las normas legales y reglamentarias; **iii)** en situación de disminución física, síquica o sensorial; o, en general, **iv)** todos aquellos que tengan una considerable afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores aun cuando no presenten una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su capacidad productiva²⁶. Y de manera particular en la sentencia **T 434 de 2020**, en la que analiza múltiples casos, explica que esta garantía de estabilidad ocupacional por motivos de salud, se predica de todo individuo que presente una afectación en la misma, situación particular que puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse discriminada por ese solo hecho. Lo anterior, con independencia de la vinculación o de la relación laboral que la preceda²⁷. En términos generales comprende la prerrogativa para el trabajador de permanecer en el empleo y, por consiguiente, obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique disponer su despido²⁸.

Sin embargo, debe señalarse que este fuero de estabilidad laboral reforzada encuentra su sustento en el contexto de **un despido discriminatorio**, hipótesis que en virtud de la Ley 361 de 1997 permite el reintegro, pero no cuando el contrato termina por la renuncia unilateral del trabajador salvo que se acredite el vicio en el consentimiento²⁹, lo que no sucede en este caso. Sobre este asunto, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia **SL 1451 de 2018** adoctrinó:

Luego, a diferencia del arreglo conciliatorio, que estuvo orientado a despojar al demandante de sus derechos y reclamos laborales bajo la apariencia de un libre acuerdo, frente al acto de renuncia **no existen motivos poderosos o elementos probatorios convincentes que conduzcan a idéntica conclusión.**

²⁶ **T-837 de 2014, T-597 de 2014, T-594 de 2015, T-368 de 2016, T-188 de 2017, T-443 de 2017, T-589 de 2017 y SU-049 de 2017**

²⁷ Conforme se indicó en la Sentencia SU-049 de 2017

²⁸ Al respecto, se encuentran, entre muchas otras, las siguientes sentencias con las cuales se verifica que la estabilidad laboral garantiza la permanencia en el empleo y el consecuente pago de salarios y prestaciones: Sentencia **C-470 de 1997, T-256 de 2016, T-638 de 2016, T-188 de 2017, T-151 de 2017 y T-305 de 2018.**

²⁹ SL 808 de 2019.

Así las cosas, la Sala desestimaré la pretensión de reintegro derivada de la renuncia, al igual que la fundamentada en la situación de discapacidad del demandante, habida cuenta que la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 opera en relación con los despidos, **no frente a dimisiones**. [...]

Y en la **SL 410 de 2020** se puntualiza:

Aunado se tiene que esa prerrogativa se pregona respecto de los trabajadores en condición de discapacidad **que hayan sido despedidos por el empleador en razón a su limitación**, situación fáctica que no se configuró en el *sub judice* en tanto el contrato de trabajo culminó por mutuo acuerdo entre las partes, conforme se plasmó en el acta de conciliación, de modo que quien dejó sin valor y efecto la carta de renuncia motivada, fue el mismo demandante al suscribir que el vínculo laboral feneció por razón diferente al despido indirecto.

Así, contrario a lo sostenido por el recurrente, la prerrogativa de la estabilidad laboral reforzada no es un derecho absoluto, **ni impide que la relación laboral termine por la voluntad del trabajador**³⁰. Así, al no haberse alegado ni mucho menos acreditado que el acto jurídico de renuncia estuviese mediado por error, fuerza o dolo, se impone la confirmación de la providencia.

Al no salir avante el recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP se causan a cargo de la demandante y se fijan las agencias en la suma de ¼ de SMMLV.

6. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

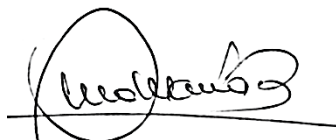
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el 25 de febrero de 2020.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante. Se fijan agencias en derecho en valor de ¼ de SMMLV a cargo de la demandante.

Lo anterior se notifica por EDICTO, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

³⁰ SL 3144 de 2021

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 05001 31 05 001 2017 00510 01

SENTENCIA del //02/12/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**

Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EmyODCypR_pJh1AbkZvjVz8BFIVAzug7lSk_hizYLWSu4g?e=GEE5TB